

Sur de Córdoba¹

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

AGOSTO DE 2020



Resumen

Desde la firma del Acuerdo de Paz, las comunidades afectadas por el conflicto armado en la subregión sur de Córdoba se han involucrado activamente en la construcción del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET y en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS. Sin embargo, las expectativas de desarrollo regional que se generaron se han visto empañadas por la fuerte presencia de los grupos armados ilegales que han ocasionado desplazamientos, amenazas y asesinatos de líderes y lideresas. Esta situación se ha agravado durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, ya que dichos grupos están ejerciendo control territorial en las zonas rurales y atentando contra la seguridad de las poblaciones. La compleja realidad del sistema de salud del departamento también ha agudizado la crisis llevando a la institucionalidad a declarar alerta roja en todo el departamento por el crecimiento acelerado de contagios.

Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

Históricamente la región del Sur de Córdoba ha sido un territorio marcado por el conflicto armado, la pobreza multidimensional, economías ilegales y una débil presencia institucional. Dichos factores conducen a que los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, San José de Uré, Tierralta y Valencia hayan sido considerados territorios PDET.

El 31 de agosto de 2018, se firmó en esta subregión el Plan de Acción para la Transformación Regional - PATR, que contiene las iniciativas que surgieron del proceso participativo de construcción del PDET. En la construcción de este Plan de Acción, participaron 6.570 actores del territorio, entre los cuales están comunidades rurales, gremios, empresas, entidades del sector público y autoridades étnicas².

Contenido

Estado de la implementación de los Acuerdos.

La situación de las víctimas.

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

Capacidades territoriales para afrontar el COVID-19.

¹ Esta revisión se centra en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y San José de Uré.

² PATR – Subregión Sur de Córdoba.

Desde que la Agencia de Renovación del Territorio - ART inició la facilitación de espacios de participación y diálogo con las comunidades, se han generado expectativas frente a las iniciativas que están plasmadas en el PATR. No obstante, algunas personas en el territorio se muestran preocupadas y desesperanzadas por la demora en la implementación de las propuestas diseñadas e incluidas en dicho plan.

Según datos de una de las organizaciones que se encarga de hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz, los Grupos Motor creados para transmitir la información de los avances del PDET no han logrado una comunicación constante y fluida con los diferentes actores territoriales, ya que al estar conformados solo por 18 personas se les dificulta estar en contacto con todas las comunidades que hacen parte de este ejercicio de construcción participativa³.

A partir de esas iniciativas consignadas en los PATR en 2019, en donde a propósito surgieron cinco pactos comunitarios y siete pactos étnicos, se inició el proceso de facilitación de espacios de implementación. Según los datos entregados por la coordinación de la ART para la subregión Sur de Córdoba, a la fecha, se cuenta con más de 1.200 iniciativas ciudadanas, como producto de ese trabajo de construcción colectiva.

Actualmente, en miras a fortalecer los bancos de proyectos, la ART en sur de Córdoba afirma que tiene en estructuración 11 proyectos de infraestructura para ser entregados a las diferentes administraciones municipales, casi todos relacionados con el mejoramiento de la red vial, y 20 proyectos productivos estructurados, de los cuales cinco ya tienen recursos asignados (en las líneas productivas de cacao, apicultura, plátano, arroz y agroforestales). Así mismo, respecto al Programa Obras PDET, a corte de 30 de junio de 2020, hay 49 Obras de Pequeña Infraestructura entregadas, por un valor aproximado de \$11.470 millones, de las cuales 30 son de infraestructura social, 17 de infraestructura vial, y 2 son de infraestructura de servicios públicos⁴.

Por su parte, el ejercicio de construcción de la Hoja de Ruta se encuentra apenas en etapa de expectativa, lo que quiere decir que la ART está dialogando con las mesas de articulación. A su vez, debido a la emergencia sanitaria por COVID – 19, el proceso de socialización de la metodología de la Hoja de Ruta con los Grupos Motor se está realizando a través de audios, infografías y llamadas, que se transmiten por medio de WhatsApp. Con esto, se busca describir el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta y que los grupos conozcan en qué consiste, su funcionalidad y cuál será el papel de la comunidad en dicho ejercicio⁵.

b) La reincorporación

³ Entrevista, 23 de junio de 2020.

⁴ ART. Respuesta a Derecho de Petición con radicado 20207000059681.

⁵ Entrevista, 14 de julio de 2020.

De acuerdo con la ARN, a 30 de junio de 2020, en el departamento de Córdoba, hay 79 personas en proceso de reincorporación, de las cuales 58 se encuentran ubicadas en el Sur de Córdoba⁶. Sin embargo, no hay ETCR o Nuevas Áreas de Reincorporación en el departamento. El 7 de junio del año 2018, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 982, por medio del cual estableció la supresión de dos de los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación - ETCR. Uno de estos Espacios Territoriales fue Gallo, en el municipio de Tierralta, donde se concentraron 150 excombatientes de los Frentes 5 y 58. De estas personas, 120 se trasladaron hacia la vereda San José de León, en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, a finales del 2017⁷.

La Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba afirma que dichos excombatientes tuvieron que desplazarse, debido a falta de garantías de seguridad y el poco respaldo a proyectos productivos. De hecho, según datos recogidos por la Fundación Social Cordoberxia, entre el 2018 y lo que va corrido del 2020 se registraron los asesinatos de dos participantes del proceso de reincorporación de las Farc en el departamento⁸.

Por otro lado, la situación de los proyectos productivos de reincorporación en el departamento es que existen 16 proyectos individuales, que benefician a 24 excombatientes, y que no hay presencia de proyectos productivos colectivos⁹.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

En el Sur de Córdoba, con excepción de Valencia, hay 4.700 familias firmantes de acuerdos colectivos para sustitución del PNIS. Tal y como lo declara un vocero de la Fundación Social Cordoberxia, estas familias solían dedicarse al cultivo de hoja de coca y se acogieron al proceso, con la expectativa de poder acceder a otros proyectos productivos. Sin embargo, de las familias vinculadas, solo 2.461 cuentan con la totalidad de los pagos por Asistencia Alimentaria Integral, 2.544 cuentan con servicios de asistencia técnica, 2.512 cuentan con proyectos de seguridad alimentaria, y ninguna familia cuenta con un proyecto productivo¹⁰.

Además, otra de las preocupaciones radica en que la estrategia del Gobierno Nacional ha sido priorizar la erradicación forzada, por encima de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos. Al respecto cabe destacar que, en la región, este año, se han presentado acciones de erradicación, en el municipio de Puerto Libertador (poblaciones El Guineo y Rancho Grande). En ambos casos, se registraron tensiones

⁶ ARN. Respuesta a derecho de petición con radicado OFI20-016353, y ARN. Reporte "Proceso de Reincorporación", con corte a 31 de mayo de 2020.

⁷ VerdadAbierta.com (9 de junio de 2018). Gobierno suprime los primeros espacios para la reincorporación de las Farc. Recuperado de <https://verdadabierta.com/gobierno-suprime-los-dos-primeros-espacios-la-reincorporacion-las-farc/>

⁸ Fundación Social Departamental Córdoba Controversial "Cordoberxia". (7 de mayo de 2020). Informe Especial: Córdoba en medio del aislamiento por la declarada pandemia del coronavirus COVID-19.

⁹ ARN. Respuesta a derecho de petición con radicado OFI20-016353.

¹⁰ ART. Respuesta a derecho de petición con radicado 20207000059681.

entre las comunidades y la Fuerza Pública, pues según los campesinos, en vista de que no avanzan los proyectos productivos de sustitución, la siembra de cultivos de uso ilícito es su única forma de subsistencia¹¹.

A esta situación, se le suma que desde la firma de los acuerdos de sustitución, 2 líderes impulsores y 5 beneficiarios del PNIS han sido asesinados¹². Además, grupos armados ilegales como las AGC, han elegido territorios lejanos para continuar con la siembra de cultivos ilícitos y esto ha generado una sensación en los pobladores de que los pequeños pasos alcanzados a través del Programa están siendo aventajados por el actuar de estos grupos pues, al estar detenido el proceso de sustitución de cultivos ilícitos, las AGC han aprovechado para tomar ventaja en la siembra de la hoja de coca.

d) Garantías de Seguridad

Entre 2016 y 2020 la Defensoría del Pueblo ha emitido 14 alertas tempranas donde se reconocen violaciones a los derechos humanos como intimidaciones y riesgos de reclutamientos forzados contra la población civil en la subregión. La presencia y el accionar hostil de grupos armados ilegales como las AGC o "Clan del Golfo", los "Caparros" y las llamadas disidencias del Frente 18 de las FARC, afecta a campesinos, comunidades afro, población LGBTI y miembros de las etnias indígenas Embera Katío y Zenú. Según información suministrada por la Diócesis de Montelíbano, en San José de Uré se han presentado enfrentamientos entre grupos ilegales, ocasionando que muchos pobladores aseguren que si el Ejército se va de la comunidad las personas también se desplazarán a otras zonas pues quedarse allí les representa una situación de alto riesgo.

En medio del aislamiento obligatorio, a causa de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Diócesis de Montelíbano también ha advertido que el actuar de los grupos armados al margen de la ley se ha fortalecido debido a la poca presencia no solo de la institucionalidad sino de diferentes organizaciones de cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil, que suelen estar presentes en los territorios y que actualmente no pueden. Este escenario ha resultado propicio para que estos grupos ejerzan un amplio control territorial en veredas como San José (municipio de Puerto Libertador), en donde están realizando un conteo del número de personas que viven allí, imponiéndose y logrando visualizarse como un ente autoritario.

El asesinato de dos líderes sociales en las primeras semanas de enero de este año obligó al gobernador del departamento a convocar un Consejo de seguridad en zona rural del Sur de Córdoba, debido a la crítica situación que padecen estas comunidades¹³. Las vidas de líderes y lideresas sociales, así como de defensores de

¹¹ Cuello, O. (15 de febrero de 2020). Advierten choques entre campesinos y Ejército por erradicación forzosa en Córdoba. *El Heraldo*. <https://www.elheraldo.co/cordoba/advierten-choques-entre-campesinos-y-ejercito-por-erradicacion-forzosa-en-cordoba-701904>

¹² Entrevista, 17 de junio de 2020.

¹³ Cuello, O. (19 de enero de 2020). Consejo de seguridad en el Sur de Córdoba por asesinato de líderes. *El Heraldo*. <https://www.elheraldo.co/cordoba/consejo-de-seguridad-en-el-sur-de-cordoba-por-asesinato-de-lideres-695179>

derechos humanos en esta subregión siguen enfrentando un alto peligro a causa de intimidaciones por parte de los grupos armados ilegales. En el mes de abril la Fundación Social Corderberxia denunció el envío de un mensaje de texto amenazante a través de WhatsApp, presuntamente realizado por el Clan del Golfo, en donde seis personas incluido el director de la fundación que trabajan por la defensa de los derechos, fueron declaradas objetivo militar¹⁴.

La situación de las víctimas

Según la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, en Córdoba hay 318.222 víctimas, de las cuales 283.370 son sujetos de atención. Por su parte, en la región del Sur de Córdoba, hay 123.013 víctimas (44,8% de la población), de las cuales 112.272 son sujetos de atención. Los hechos victimizantes más comunes son el desplazamiento, el homicidio y la amenaza.

Respecto a los procesos de reparación, a la fecha se han indemnizado 34.921 personas¹⁵, de las cuales 10.528 están en la subregión PDET. Además, se han aprobado en el departamento 10 Planes de Retorno y Reubicación, 21 actividades de satisfacción y 3 Planes Integrales de Reparación Colectiva. Además, al menos 2.500 personas han participado de procesos de atención psicosocial. La preocupación sobre esta población ha aumentado debido a los recurrentes desplazamientos que han venido ocurriendo en el Sur de Córdoba. En la zona del San Jorge, específicamente en el municipio de San José de Uré, combates entre las disidencias de las FARC y las AGC ocasionaron el desplazamiento masivo de alrededor de 850 familias en 2018¹⁶. Así mismo, para 2019 se reportó un total de tres desplazamientos masivos y uno de ellos tuvo lugar en Puerto Libertador. Por otro lado, en Alto de Uré cerca de 73 habitantes de la comunidad Embera Dochama y 53 personas de la vereda Batatalito fueron también desplazadas por grupos armados al margen de la ley¹⁷.

Durante el periodo de cuarentena se evidencia que las inquietudes de las víctimas han incrementado, específicamente en lo que tiene que ver con la verificación del avance de los procesos de indemnización y las solicitudes de ayudas humanitarias¹⁸.

¹⁴ Caracol Radio (14 de abril de 2020). Denuncia Corderberxia: declaran objetivo militar a líderes en Córdoba. Recuperado de:

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/14/monteria/1586864410_384440.html

¹⁵ UARIV. Ficha estratégica – Córdoba y Sur de Córdoba.

¹⁶ La Liga Contra el Silencio. (9 de octubre de 2019). Sur de Córdoba, el desplazamiento a hombros del miedo. Recuperado de <https://ligacontraelsilencio.com/2019/09/09/sur-de-cordoba-el-desplazamiento-a-hombros-del-miedo/>

¹⁷ Pares. (18 de noviembre de 2019). Alerta: desplazamiento de comunidades en el Sur de Córdoba. Fundación Paz y Reconciliación. Recuperado de <https://pares.com.co/2019/11/18/alerta-por-desplazamiento-de-comunidades-en-el-sur-de-cordoba/>

¹⁸ Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. (17 de abril de 2020). Víctimas en Córdoba siguen conectadas con la Unidad a través de canales alternativos de atención. Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas. Recuperado de <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/atencion-victimas/victimas-en-cordoba-siguen-conectadas-con-la-unidad-traves-de-canales-alternativos>

Principales dinámicas y trayectorias de la confrontación armada

En el Sur de Córdoba tanto las AGC como los “Caparros” y las disidencias del Frente 18 de las FARC están disputándose el control del tráfico de drogas y el traslado entre las cuencas de los ríos Verde, Tigre, Esmeralda, Sinú, Manso y San Jorge, debido a que estas fuentes hídricas conectan a los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. Las economías ilícitas y los constantes enfrentamientos de estos grupos armados ilegales han ocasionado altos riesgos en la vida de líderes, lideresas y activistas de estas comunidades.

Esta subregión ha sido la más afectada del departamento por la violencia y por la falta de garantías de seguridad, incluso desde antes de la firma del Acuerdo de Paz. Una vez firmado dicho Acuerdo, se han registrado desplazamientos masivos que afectan sobre todo a las comunidades rurales de los distintos municipios del sur. Según la Defensoría del Pueblo a finales del mes de noviembre del año 2017 un enfrentamiento entre el Ejército y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, generó el desplazamiento de 190 familias indígenas Embera Katío de Tierralta en el Alto Sinú¹⁹.

En el contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19, quienes están controlando la entrada de personas a las comunidades rurales en el Alto Sinú son la Guardia Indígena y las Juntas de Acción Comunal. Sin embargo, tal y como lo denuncia la Fundación Social Cordoberxia, a pesar de que estas son las caras visibles, en algunas ocasiones las órdenes vienen directamente de los grupos armados ilegales, especialmente del Clan del Golfo, quienes utilizan a miembros de las comunidades para dichas acciones de control territorial.

A finales del 2019, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 054, que recoge todo el escenario de riesgo en el Sur de Córdoba y todas las alertas desde el año 2018 y determinó que se ha reclutado un alto número de menores en áreas rurales dispersas en los corregimientos de Juan José, Río Verde, San Juan, Tierralta, el casco urbano de San José de Uré, Versalles, Palmira, Batata, Crucito y el Alto Sinú; sin que las familias se atrevan a denunciar por temor a retaliaciones de los grupos armados ilegales. Según datos de la Fundación Cordoberxia, entre el 18 de febrero de 2016 y el 7 de mayo de 2020 se han registrado los asesinatos de 35 líderes y lideresas sociales, 28 de estos habitantes del Sur de Córdoba. Sumado a esto, las constantes intimidaciones contra activistas sociales han dejado un total de 260 personas amenazadas en el departamento de Córdoba²⁰.

¹⁹ OCHA. (2017). Desplazamiento masivo en Tierralta (Córdoba) (No. 1). Recuperado de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/colombia_flash_update_desplazamiento_masivo_tierralta_cordoba.pdf

²⁰ Fundación Social Departamental Córdoba Controversial “Cordoberxia”. (7 de mayo de 2020). Informe Especial: Córdoba en medio del aislamiento por la declarada pandemia del coronavirus COVID-19.

Capacidades territoriales para enfrentar el COVID-19

El 5 de julio de 2020 la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba declaró la alerta roja ante el aumento del número de contagios por COVID-19 y la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos. La resolución 00941 expedida en esa misma fecha por la Gobernación, estableció las cifras de 1.086 casos positivos, 77 muertes, de las cuales, 64 fueron a causa del COVID – 19, representando así una letalidad del 6,1%, por encima de la media nacional que es del 3,4%, según se lee en el documento.

En el Sur de Córdoba, el sistema de salud en municipios como Puerto Libertador y Montelíbano ha respondido relativamente bien en términos de dotación y disposición de personal médico, sin embargo, en Tierralta y San José de Uré la situación es grave puesto que el personal de la salud denuncia que se les adeudan meses de salario por su trabajo. Se alerta además que esta subregión no dispone de Unidades de Cuidados Intensivos, por lo que no existen condiciones hospitalarias para atender el reporte de más de 5 casos de COVID-19. La situación empeora cuando se trata de la población de zona rural ya que en estos territorios no existen centros de salud dotados con los implementos requeridos para atender la crisis, y actualmente la única forma de trasladarse desde las veredas o corregimientos hacia el centro de salud más cercano (en la cabecera municipal) es en motocicleta, pues no hay transporte interveredal.

Otro factor que agudiza esta situación es que uno de los más altos índices de pobreza multidimensional del departamento se encuentra concentrado en el Sur de Córdoba así: Tierralta con un 63,8%, San José de Uré con un 61,3% y Puerto Libertador con un 58,9%. Sumado a esto, en 2018 la tasa de camas hospitalarias en el departamento era de apenas 3,1 por cada diez mil habitantes, mientras que la tasa de ambulancias era del 0,09 por cada diez mil habitantes²¹. Esto demuestra que el departamento no se encuentra preparado para atender a toda la población.

La falta de conectividad en las áreas rurales del Sur de Córdoba se ha convertido también en un obstáculo que impide que los niños, niñas y adolescentes accedan a su derecho a la educación. Según el DANE en 2018 solo el 21% de los hogares cordobeses contaban con acceso a internet, y de este solo el 8,4% accedía en la zona rural. El índice de deserción escolar está creciendo y la Secretaría de Educación Departamental aún no cuenta con una ruta segura para que los NNA regresen a las aulas ya que el riesgo de contagio puede aumentar debido a que muchas escuelas no cuentan con buenas prácticas de higiene que reduzcan las condiciones para contraer el virus o propagar las cifras de infectados. No es posible pensar en que maestros y estudiantes retornen a las instituciones educativas pues

²¹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo & Alianza del Sur de Córdoba. (2019). Córdoba: Retos y desafíos para el desarrollo sostenible. https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/cordoba-retos-y-desafios-para-el-desarrollo-sostenible.html



situaciones como la ausencia de baterías sanitarias representan un peligro para la salud de la comunidad.